

“El desarrollo sostenible desde la perspectiva ecologista y su posible incorporación al discurso de los derechos humano”

María Eugenia Rodríguez Palop
Universidad Carlos III de Madrid

No cabe la menor duda de que existe un problema ambiental que mediatiza nuestro modelo de desarrollo, un modelo en el que apreciamos, desde hace tiempo, signos alarmantes de que algo no funciona. La distancia que separa la gravedad de tal problema, la supuesta conciencia ambiental y los tímidos esfuerzos destinados a su solución, es, absolutamente, abrumadora.

Las causas de tal distancia son variadas y aparecen en un arco que va desde la complejidad de la cuestión ambiental y la multitud de intereses en juego, hasta el desacuerdo mismo acerca de aquello que nos ha llevado a esta difícil situación.

Así, algunos interpretan la crisis ambiental como una crisis pasajera de la que es posible salir sin cambiar, esencialmente, nada en las formas de funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, ni en sus relaciones con la naturaleza (a esta postura la llamaremos “ambientalismo”).

Para otros, sin embargo, resulta necesario y urgente modificar las reglas de tal funcionamiento, remover los pilares básicos de la civilización dominante y provocar, finalmente, un auténtico cambio civilizatorio. Desde este paradigma- al que denominaremos aquí “ecologista”- se reivindica el derecho al medio ambiente como un derecho humano y, con ello, se intenta desmontar, entre otras cosas, la falacia de un dominio unidireccional y absoluto del hombre sobre su entorno. Es decir, se pretende desmontar esa fe irracional en el progreso irreversible que tiene en la veneración de lo nuevo uno de sus cimientos más básicos y que olvida los propios límites materiales del progreso. En este artículo veremos únicamente esta vertiente de la lucha ambiental.

Aunque hay muchas y muy distintas formas de ecologismo- y aunque pueden citarse entre las causas de su surgimiento como movimiento social una muy variada gama de elementos-, consideraré aquí la perspectiva ecologista que me parece compatible con el discurso de los derechos humanos y que es, por definición, antropocéntrica (si bien maneja un antropocentrismo débil) y entenderé, como la explicación más verosímil de su nacimiento, el déficit de legitimidad democrática que se aprecia en el denominado “mundo desarrollado” desde la década de los sesenta/setenta.

Tal déficit tiene su origen, entre otras cosas, en la contradicción estructural en la que se apoya el esquema político y que consiste en combinar la legitimación pública (democracia) y la acumulación privada

(capitalismo); es decir, que pretende recabar el apoyo popular para un modelo en el que se socializan los costes y se privatizan los beneficios.

El equilibrio entre estos elementos, tendencialmente contradictorios, pudo mantenerse durante un determinado período de tiempo, pero acabó por inclinarse en favor del capitalismo. De hecho, la democracia en la que este modelo se apoya tiene un diseño estrictamente liberal; en ella, los asuntos políticos son vistos como productos de mercado y el ciudadano como un consumidor que opta por la “mercancía electoral” que mejor satisface sus intereses privados y estratégicos. Un diseño, por tanto, en el que se renuncia a la discusión ideológica y a la identificación de y con los intereses colectivos y que, como vemos, imita, en esencia, la dinámica del mercado. O sea, que la política, en este esquema, no sirve para controlar a la economía, sino que, más bien, se orienta a reforzarla.

En fin, como ya he indicado, la posible incorporación de la demanda de desarrollo sostenible¹ o del derecho al medio ambiente en el discurso de los derechos humanos no puede venir más que de la mano del ecologismo. Pero, ¿qué significa reivindicar un desarrollo sostenible desde el discurso de los derechos humanos? ¿Qué aporta realmente el ecologismo a este discurso?

La defensa de un desarrollo sostenible parte de la premisa de que el crecimiento no puede ser ilimitado, apuntando a una distinción clara y tajante entre crecimiento y desarrollo y denunciando la confusión que suele darse entre bienestar e incremento cuantitativo de bienes. Optar por el desarrollo frente al crecimiento exige, por supuesto, un cambio drástico en las pautas de producción, distribución y consumo; un cambio que se apoya en la sustitución de la racionalidad económica por la racionalidad ecológica. Esto, entre otras cosas, excluye la posibilidad de asignarle un valor económico al daño ambiental.

En efecto, desde este prisma, los recursos naturales forman parte del patrimonio colectivo y no pueden ser valorados en el mercado mediante la simple asignación de un precio. Y ello por varias razones que no son de carácter exclusivamente moral o ideológico, sino también económicas.

La desmitificación del mercado perfecto en el que el precio es un indicador del valor, no es, obviamente, una aportación del movimiento ecologista, sino de los análisis marxistas, entre otros. Sin embargo, puede decirse que esta desmitificación se hace más necesaria cuando de lo que se trata es de “comerciar” con recursos naturales de importancia vital. Aquí, la incertidumbre, el riesgo, la confusión entre riqueza natural y precio de mercado, la inexistencia de agentes económicos concretos e individualizados, la necesidad de considerar la dimensión temporal de nuestras acciones y omisiones, que son sólo algunos de los factores más relevantes que suelen distorsionar la “realidad” económica, adquieren tintes dramáticos.

En fin, la patrimonialización de los recursos parte de la base de que es posible cuantificar los costes del desarrollo como crecimiento económico y esto es cuestionable, tanto desde un punto de vista moral, como económico.

Por lo que respecta a los modos de producción, el ecologismo apuesta por la descentralización económica, la conversión del ámbito local en un espacio productivo cada vez más desvinculado del mercado mundial y, en definitiva, por un desarrollo autocentrado. Todo ello combinado con una producción más limitada y, además, controlada de acuerdo a criterios cualitativos; una producción que no se oriente por el eslogan capitalista "más es mejor", por la obtención del mayor número de beneficios en el menor espacio de tiempo posible. O sea, se entiende que la producción en comunidades pequeñas coordinadas es más estable, más autónoma y más favorable a la cohesión social y se apuesta por el biorregionalismo (que no suscriben del mismo modo todas las ramas del ecologismo).

El biorregionalismo es una forma sostenible, por definición, de organizarse económica y políticamente dado que opta por la adaptación al entorno, rechazando la ideología del dominio y la intervención sobre la naturaleza, y facilita un desarrollo autosuficiente que respeta, además, la diversidad. Es, en definitiva, una forma de relación equilibrada con el ambiente que nos llevaría a consumir lo que podemos producir (considerados los límites naturales) y no a producir lo que "deseamos" (no necesitamos) consumir. Se trata, pues, de someter la producción a los límites estructurales e internos al crecimiento: los límites planetarios de carga (población), de absorción (residuos) y de producción (recursos).

Evidentemente, el citado modelo económico no podría articularse sin la puesta en marcha de un esquema político descentralizado que se articule sobre diferentes y variados ámbitos para la toma de decisiones (infra y supraestatales) y que actúen, coordinadamente, bajo la filosofía de la solidaridad y la cooperación. Esta filosofía se apoya en la idea de que todos formamos parte de un entramado social, por lo que, prácticamente, todas nuestras acciones y omisiones tienen efectos sobre terceros. De ahí, que el progreso moral se identifique con la ampliación indefinida del círculo del "nosotros" y con la asunción de una ética de la responsabilidad.

Dado que en el programa ecologista la solidaridad no es sólo sincrónica, sino también diacrónica, no tiene mayor relevancia que esos terceros sean seres reales o potenciales. La responsabilidad hacia las generaciones futuras parte de la base de que la prioridad en el tiempo no añade ningún *plus* de legitimidad a nuestros actos. Haber llegado primero no nos legitima, en términos morales, a perjudicar al que llega después, directamente o limitándole su horizonte de futuro; evitando, de este modo, que pueda disponer del mismo número de posibilidades de desarrollo que nosotros hemos disfrutado. Aprovecharse impunemente de esta prioridad y transferir a otros los costes y riesgos de nuestro modo de vida, no es sólo irracional, sino injusto. Y a esta

¹ Aunque técnicamente me parece más adecuado el término "sustentable" utilizo aquí este otro por resultar más reconocible y más identificable por quienes no están inmersos en la discusión teórica sobre estas

exigencia se añade, finalmente, un aspecto más: los ecologistas exigen que la solidaridad amplíe el círculo del “nosotros” también a otras especies que han de ser consideradas en el discurso moral, si no como agentes morales, sí, al menos, como pacientes morales (fundamentándose de este modo la exigencia de deberes para con ellas).

En fin, parece claro que apostar por un desarrollo sostenible desde el ecologismo exige modificar, en esencia, nuestro código moral y requiere, también, articular un modelo económico y político alternativo. Lo que hasta ahora hemos asumido, a duras penas, ha sido sólo el paradigma ambientalista, desde el que, en el mejor de los casos, sólo se pretende internalizar el coste ambiental, evitando cualquier transformación en nuestro modo de vida. Sin embargo, la perspectiva ecologista del desarrollo nos abre un horizonte mucho más exigente y, a mi modo de ver, también más racional, frente al que, precisamente por su relevancia, el discurso de los derechos humanos no puede quedar inmune.